

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Repositorio Institucional del ITESO

rei.iteso.mx

Centro de Investigación y Formación Social

CIFS - Libros y capítulos de libros

2012-10

Introducción al libro Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil

Tetreault, Darcy; Ochoa-García, Heliodoro; Hernández-González, Eduardo

Tetreault, D.; Ochoa-García, H. y Hernández-González E. (2012) "Introducción". En Tetreault, D.; Ochoa-García, H. y Hernández-González E. (coords). Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil. Guadalajara: ITESO.

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/426>

Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia: <http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf>

(El documento empieza en la siguiente página)

INTRODUCCIÓN

Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa García
y Eduardo Hernández González

Los conflictos socioambientales en México se han multiplicado en las últimas dos décadas. Estos giran en torno a la contaminación industrial, las actividades mineras, el cambio de uso de suelo, la deforestación, la construcción de presas, la introducción de semillas genéticamente modificadas, el mal manejo de desechos sólidos y la privatización de tierra, agua y biodiversidad, entre otros. Las comunidades pobres suelen ser las más perjudicadas en este tipo de actividades ecológicamente destructivas, y se enfrentan a promotores privados y del estado que detentan el poder. Así, en las comunidades marginadas a lo largo y ancho del país, organizaciones populares emergen para proteger el medio ambiente, la salud y los medios de vida que las sostienen. Estas forman alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades y otros sectores de la sociedad civil, con lo que constituyen movimientos socioambientales de raíz local que se articulan a redes nacionales e internacionales, para dar a conocer su lucha, facilitar el intercambio de ideas y experiencias, formular demandas colectivas y proveer apoyo mutuo y solidario.

Las alternativas a los conflictos ambientales nacen en comunidades que se organizan en el ámbito local y se articulan en redes de largo alcance. Las estrategias de acción e interlocución entre los involucrados del conflicto varían a lo largo del tiempo, pero los objetivos de los afectados mantienen

algunas constantes: lograr el control de su territorio y recursos naturales, restaurar las condiciones ecológicas de su entorno, mantener sus prácticas socioculturales y productivas, ser ellos mismos los que deciden su futuro y ser tratados en igualdad de condiciones y derechos. Las alternativas que surgen en México son tan diversas como los conflictos socioambientales y los territorios en donde tienen lugar.

¿Cuáles son las causas subyacentes de estos conflictos? ¿quiénes son los protagonistas? ¿cuáles son sus demandas, propuestas y estrategias? ¿cómo interactúan con los actores externos? y ¿en qué medida han contribuido a proteger o sanear el medio ambiente, patrimonio de todos? Estas son algunas de las principales interrogantes que se abordan en este libro, que reúne nueve trabajos de investigadores con diversas afiliaciones universitarias. Este esfuerzo colectivo se originó en el IV Encuentro Nacional y I Internacional sobre Estudios Sociales y Región, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, entre el 13 y el 15 de octubre de 2010. La mayoría de los autores de este libro participó en ese evento con ponencias sobre la problemática del medio ambiente, conflictos socioambientales y alternativas en el estado de Jalisco. En el mismo evento, hubo una mesa para los representantes de organizaciones populares de afectados ambientales, que compartieron sus experiencias de lucha con la comunidad universitaria allí reunida. En este contexto surgió la idea de formar un observatorio para facilitar la vinculación entre investigadores interesados en estos temas, afectados ambientales y activistas sociales. El primer resultado del proyecto es este libro que el lector tiene en sus manos. Pretende ser un primer acercamiento, sobre todo descriptivo, de los conflictos socioambientales en México, con estudios de caso en el estado de Jalisco. El horizonte temporal se concentra en la primera década del siglo XXI, haciendo algunas referencias que se remontan cincuenta años o más, a fin de poder comprender la raíz y el contexto de los conflictos aquí estudiados.

Antes de seguir adelante, compartimos algunas reflexiones sobre los conceptos clave que aparecen de manera reiterada en las páginas que siguen. Los coordinadores de esta obra hemos advertido que hay diferencia entre un *problema ambiental*, un *conflicto socioambiental* y un *movimiento socioam-*

biental. No pretendemos ofrecer definiciones precisas, pero observamos que un problema ambiental puede existir sin causar por fuerza un conflicto. Por ejemplo, el problema de contaminación en el río Santiago duró varias décadas antes de convertirse en uno de los conflictos ambientales más agudos en el occidente del país, que involucra las comunidades afectadas de El Salto–Juanacatlán y un conjunto de organismos gubernamentales encargados de la gestión del agua y del control de la contaminación. El problema empezó en la década de los setenta, pero fue hasta principios de este nuevo siglo cuando se empezó a escuchar la voz de los afectados, quienes denunciaban problemas de salud pública relacionados con los altos niveles de contaminación en el río. A partir de entonces, se puede hablar de un conflicto sobre un bien ambiental: el río Santiago, que después de ser fuente de agua potable, lugar de diversión y belleza natural, se convirtió en un peligro y un sitio apestoso para los habitantes de la ribera y, en menor medida, para todos los pobladores de la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí irrumpe un movimiento socioambiental, impulsado por organizaciones populares (Instituto VIDA, Un Salto de Vida, y Comité Ciudadano), que pronto se articularon con organizaciones no gubernamentales (ONG) profesionales —por ejemplo, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC)— y convocaron la participación de investigadores y estudiantes de diversas instituciones, para luego vincularse entre sí y con redes nacionales e internacionales.¹

Siguiendo con las reflexiones sobre los conceptos clave, tal vez sea redundante incluir el prefijo *socio*— en el término conflicto socioambiental, pues no puede haber un conflicto o un movimiento sin sujetos sociales. Sin embargo, llegamos a la conclusión que esta redundancia vale la pena porque enfatiza la dimensión social de los problemas ambientales, una dimensión con frecuencia relegada a segundo plano por los *optimistas tecnológicos*, que creen que estos problemas se resuelven mediante una salida tecnológica (*technological fix*), por lo general proporcionada por los líderes del sector privado con la

1. Este caso se analiza con más detalle en el texto “Panorama de conflictos socioambientales en Jalisco”, incluido en este libro.

colaboración del estado. A diferencia de esa visión tecnocrática, nosotros creemos que, para superar los complejos e interrelacionados problemas de degradación ambiental, pobreza y desigualdad, hay que colocar la dimensión social en el centro del análisis y soluciones. En otras palabras, se requieren cambios estructurales profundos (políticos, sociales, económicos, culturales, etc.) que solo los movimientos sociales pueden impulsar.

Los conflictos socioambientales en México

Si bien las luchas sociales en el campo mexicano siempre han tenido una dimensión ecológica implícita, no fue sino hasta finales de los años setenta que los protagonistas de estas empezaron a destacar su carácter ecologista. En esa coyuntura, marcada por el surgimiento de movimientos populares reivindicativos y por una mayor conciencia de los problemas ambientales asociados al proceso de industrialización, se encuentran ejemplos de organizaciones campesinas e indígenas que emplean discursos ecologistas para respaldar sus protestas y demandas (Bray, 1997). Dos casos citados con frecuencia son el Pacto Ribereño, formado en 1976 por 23 núcleos agrarios en el estado de Tabasco, con el propósito de demandar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) por la destrucción que este había causado en tierras agrícolas, y la Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro (ORCA), creada en 1979 para prevenir la construcción de un centro de investigación de energía nuclear en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, Michoacán.²

Luchas como estas proliferaron durante las siguientes décadas (Velázquez García, 2010). Hacia 1991, había alrededor de 30 organizaciones campesinas e indígenas que llevaban a cabo acciones de protesta y demanda en contra de la contaminación industrial a todo lo largo del país (Toledo, 1992). Al mismo tiempo, formas de producción ecológica y socialmente sustentables emergieron *de abajo*, como la agroecología (Morales Hernández, 2004), el

2. Para una descripción detallada de estos dos movimientos, véanse, por ejemplo, Flores, Paré y Sarmiento (1988), Bray (1997) y Velázquez García (2010).

comercio justo (Roozen y Van der Hoof, 2002) y el manejo forestal comunitario (Bray *et al*, 2003). Algunos investigadores (Nigh, 1992; Carruthers, 1996; Toledo, 2000a, entre otros) han observado que los protagonistas de estas alternativas tienden a ser indígenas, reciben apoyo técnico de organizaciones civiles, y en general reflejan lo que Enrique Leff (1996) llama una nueva racionalidad ecológica-productiva.

Durante los últimos años, los conflictos socioambientales se han manifestado en muchas partes de México, ahora no solo en el campo sino también en contextos urbanos. Algunos de los conflictos que más atención han recibido a nivel nacional giran en torno a la construcción de grandes presas o la amenaza de construirlas (por ejemplo, las de Arcediano y El Zapotillo en Jalisco, La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, y la Picachos en Sinaloa); la destrucción masiva causada por compañías mineras (como Blackfire, en varias partes de Chiapas, New Gold y First Majestic Silver, en San Luis Potosí, y Fortuna Silver, en Oaxaca); la contaminación causada por las maquiladoras en Tijuana, las Granjas Carroll (Smithfield Foods) en Veracruz, y los desechos industriales y municipales que se vierten en el río Santiago, entre muchos otros. Además, ha habido protestas en contra de planes de infraestructura del transporte: la extensión de la línea 12 del metro en el Distrito Federal hasta Tláhuac; el proyecto de aeropuerto en San Mateo Atenco; el megaproyecto de construcción de autopistas en el estado de Puebla, y la carretera Bolaños-Huejuquilla en Jalisco. Hay muchos otros casos y todos tienen una dimensión ecológica explícita en los discursos de los manifestantes.

Según Mina Navarro y César Enrique Pineda (2010), estos conflictos reflejan luchas anticapitalistas que han surgido para resistir “la acumulación por desposesión”, para usar una frase popularizada por David Harvey. Desde el punto de vista de este último autor, las políticas neoliberales de las últimas tres décadas facilitaron “la acumulación por desposesión”, un proceso equivalente a “la acumulación originaria” o “primitiva” de la que habla Karl Marx en el primer volumen de *Capital*, “basada en la depredación, el fraude y la violencia” (Harvey, 2004: 112).

Las primeras redes nacionales de organizaciones ambientalistas en México aparecieron en los años ochenta, por ejemplo, la Red Alternativa de Eco-Comunicación, la Federación Conservacionista Mexicana y el Movimiento Antinuclear Mexicano. Sin embargo, estas se desvanecieron con el tiempo (Velázquez García, 2010). Más recientemente, se han creado cuatro importantes redes nacionales para coordinar las luchas ecologistas en México: la Red en Defensa del Maíz Nativo (RDMN), que nació en enero de 2001, tres meses después del descubrimiento de maíz transgénico en Oaxaca; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), conformado en octubre de 2004; la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), creada durante el V Encuentro del MAPDER, en junio de 2008, y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), creada en agosto de 2008, con la participación de más de 80 organizaciones locales y regionales (Barreda, 2010). Por otra parte, estas redes nacionales se vinculan con organizaciones internacionales, tales como la Vía Campesina, International Rivers y la Red Latinoamericana contra Represas, además de relacionarse con instituciones de investigación en diferentes países.

De acuerdo con Joan Martínez Alier (2009), estas movilizaciones pueden ser vistas como “el ecologismo de los pobres”, con objetivos que se definen en términos de las necesidades ecológicas para la vida, lo que implica resguardar los recursos naturales fuera del sistema capitalista. Desde esta perspectiva, el desarrollo capitalista ha generado conflictos ecológicos distributivos, sobre todo en el *sur global*, con los beneficios económicos concentrados en las manos de los relativamente ricos (constructores inmobiliarios, dueños de fábricas, accionistas de compañías mineras, productores de biotecnología, etc); mientras que los costos se pagan de manera desproporcional por los pobres (indígenas, campesinos, trabajadores populares y pobladores de barrios marginados), en particular los que viven cerca de los focos de contaminación y aquellos cuyos medios de vida son amenazados. De ahí surge la resistencia.

“La historia está llena de movimientos ecologistas de los pobres, es decir, de conflictos sociales con contenido ecológico y cuyos actores tenían una percepción ecológica” (Martínez Alier, 1994: 20). Mauricio Folchi está de

acuerdo en tanto que los conflictos sociales con contenido ecológico tienen una larga historia, pero señala que no siempre “enfrentan exclusivamente a pobres contra ricos, ni a poderosos contra débiles”, e ilustra esto con algunos ejemplos de la historia de Chile (Folchi, 2001: 99). Este es un punto importante que no hay que perder de vista. Por otra parte, a todas luces los conflictos que se acercan al tipo ideal (en el sentido weberiano) del “ecologismo de los pobres” se están multiplicando en el marco neoliberal, cuando menos en México.

Lo anterior se constata en el capítulo “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales” de este libro, donde se presentan por primera vez los resultados de una investigación exhaustiva llevada a cabo por María Fernanda Paz Salinas entre mayo de 2009 y mayo de 2011. A través de su colaboración con la ANAA, y con base en una revisión sistemática de la prensa nacional, esta investigadora ha registrado 95 casos de conflictos socioambientales en 21 estados de la república. Paz Salinas reconoce que este panorama es incompleto, que hay vacíos donde existen conflictos que no han sido atendidos por parte de la prensa nacional, ni tienen representación en la ANAA. Por otra parte, su investigación pionera nos da una idea sobre la localización de sitios en resistencia, los recursos afectados o en disputa, el tipo de afectación y las causas inmediatas de la misma. A nivel nacional, 39% de los casos tienen que ver con cuestiones de agua, 25% con tierras de cultivo y territorio, y 15% con áreas protegidas. En cuanto a las causas inmediatas, más de la mitad dimanar de procesos de urbanización, industria y minería a cielo abierto. Las causas estructurales tienen dos vertientes que no se excluyen mutuamente: “una económica, vinculada a los procesos de desarrollo, expansión del capital y privatización de los bienes naturales, y otra política, que se expresa a través de la imposición, la corrupción, el cambio en el rol del estado y las luchas de poder que debilitan las capacidades políticas en los ámbitos locales”. Esta reconocida investigadora concluye que los conflictos socioambientales se presentan, “no como un problema de la sociedad contemporánea sino como una oportunidad para detener el deterioro, ofrecerle resistencia y generar (o regenerar) formas asociativas

que expresen e impulsen proyectos contra hegemónicos”. En este sentido, les da la bienvenida.

El capítulo “Movilizaciones en torno a la Conferencia de las Partes en Cancún: lazos solidarios multiplicados por el mundo” tiene como objetivo hacer una reflexión sobre las movilizaciones en torno a la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas (COP16), realizada en Cancún a finales de 2010. Como participante en dicha movilización, Lizette Santana Belmont describe la trayectoria de tres caravanas que pasaron por lugares de deterioro y conflicto socioambiental en diversas partes de México, hasta confluir en el Distrito Federal, y de ahí seguir su camino hacia Cancún.

Desde una postura militante, nos ofrece una sinopsis de la problemática ambiental y de las luchas de resistencia que hay en aquellas localidades donde las caravanas hicieron escala; menciona las múltiples organizaciones que participaron y describe la identidad colectiva que se tejió sobre el camino. Por otra parte, analiza de manera crítica y con detalle los mecanismos promovidos por el Banco Mundial para enfrentar el cambio climático, así como “los acuerdos y desacuerdos” de la COP16, y los contrasta con las propuestas alternativas presentadas en el Campamento de Vía Campesina y en el Foro Global por la Vida, la Justicia Social y Ambiental, mismas que fueron desarrolladas en Cochabamba en abril de 2010 (Los Acuerdos de Cochabamba). Para esta autora y activista social, no cabe duda que dichas alternativas apuntan a un camino hacia adelante.

Desde acercamientos metodológicos distintos y a escala estatal, los siguientes dos textos ofrecen un panorama de los conflictos socioambientales en Jalisco. “Mapeo de conflictos ambientales y alternativas en Jalisco, aportes para una metodología” empieza por considerar la relevancia de los conflictos socioambientales a nivel global, para después exponer el método que el autor, Heliodoro Ochoa García, ha desarrollado para mapear este tipo de conflictos y alternativas a nivel municipal en el estado de Jalisco. Primero, resume los antecedentes, es decir, las bases de datos que en esta materia elaboran instancias gubernamentales y organizaciones sociales. Observa que “ninguna instancia de carácter federal, estatal o municipal dispone de infor-

mación veraz, completa y sistematizada sobre el tipo o cantidad de sustancias y contaminantes que se manejan en Jalisco”. En cuanto a las organizaciones sociales, si bien han sistematizado una gran cantidad de información sobre los conflictos con representación en la ANAA y en su capítulo regional (la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, ARAA), “todavía no ofrecen abiertamente un mapeo de los conflictos y problemáticas que tienen en sus registros”. Este texto pretende llenar este vacío. Con base en una revisión sistemática de notas periodísticas de los años 2005, 2008 y 2009, Ochoa García elabora una matriz compuesta de 11 variables que se halla vinculada a un sistema de información geográfica. Los resultados se presentan en forma sistematizada, fácil de comprender. Con ayuda de esta herramienta para la sistematización de casos, se descubre que en el estado de Jalisco existe un predominio de conflictos relacionados con el rezago en el tratamiento de aguas residuales, así como el manejo inadecuado y disposición final de residuos municipales; le siguen en importancia las afectaciones a los bosques, aguas superficiales y biodiversidad (semillas y recursos fitogenéticos), mientras que los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara son sobre todo afectados por la mala calidad del aire, escasez de agua para uso doméstico y dificultades para el desarrollo e implementación de políticas ambientales relacionadas con los ordenamientos ecológico territoriales. Con todo, las aportaciones metodológicas y los mapas presentados pretenden servir “para comprender variables espaciales y geográficas implícitas detrás del conflicto y de su alternativa”.

En “Panorama de conflictos socioambientales en Jalisco”, Darcy Tetreault y Cindy McCulligh acercan la lupa a cinco de los principales conflictos socioambientales en el estado de Jalisco, que giran en torno a: la minería a cielo abierto en la Sierra de Manantlán; la contaminación del río Santiago, en El Salto y Juanacatlán; los planes para construir la presa Arcediano en la barranca de Huentitán; la construcción de la presa El Zapotillo, y las maniobras para construir la carretera Bolaños–Huejuquilla, en territorio indígena wixárika. Con base en un acercamiento orientado al actor, estos investigadores indagan sobre las organizaciones que protagonizan los movimientos de resistencia que han emergido en torno a esos conflictos, en particular con

respecto a sus alianzas, acciones, demandas y propuestas. Además, examinan la dinámica de la interacción entre los movimientos estudiados, por un lado, y los actores gubernamentales y del sector privado, por el otro, buscando tendencias y lecciones para contribuir a un mejor entendimiento de las condiciones necesarias para lograr los objetivos del movimiento en torno a la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos de los pobres. En su análisis global de los cinco estudios de caso observan avances importantes, sobre todo en el terreno de la concientización, pero también con respecto a la cancelación del proyecto Arcediano, la detención de la carretera Bolaños–Huejuquilla y la suspensión de los planes para ampliar las actividades mineras en Manantlán. Por otra parte, al tomar en cuenta la obstinación del gobierno para seguir adelante con la construcción de la presa el Zapotillo, la persistencia de altos niveles de contaminación en el río Santiago, la continuación de explotaciones mineras a cielo abierto en Manantlán y la destrucción de sitios sagrados en el territorio wixárika, consideran que los avances hasta la fecha han sido “parciales y limitadas”, lo que apunta hacia la necesidad de redoblar los esfuerzos de la sociedad civil para enfrentar los severos problemas socioambientales en el estado de Jalisco.

Los siguientes tres capítulos se concentran en estudios de caso a nivel local; todos tienen lugar en el estado de Jalisco. El capítulo “Temacapulín: la lucha de un pueblo que se resiste a desaparecer”, escrito por Cecilia Lezama Escalante, profundiza el análisis sobre el conflicto en torno a la construcción de la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco. Con base en entrevistas abiertas a informantes clave, realizadas en las comunidades de la región, así como una revisión exhaustiva de documentos relevantes, esta investigadora narra la experiencia del movimiento para detener la construcción de esa presa y salvar los tres pueblos que el proyecto pretende inundar: Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Después de resumir los antecedentes pertinentes, Lezama Escalante presenta un análisis detallado de los diversos recursos utilizados por los pobladores de Temacapulín, donde la resistencia ha sido más feroz. Estos recursos incluyen la organización interna, el establecimiento de vínculos con redes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, el diálogo con las autoridades, las acciones

directas (marchas y plantones), las acciones legales, la búsqueda de apoyos de partidos políticos, y el uso de medios para difundir información sobre la lucha. De esta manera, arroja luz sobre la dinámica de una batalla prolongada y pone de relieve múltiples irregularidades legales y administrativas por parte de las autoridades. A pesar de todo, la construcción de El Zapotillo sigue avanzando, lo que lleva a la autora a preguntar: “¿hasta dónde se puede mantener la resistencia social ante una situación de injusticia ambiental avalada por el propio gobierno?”.

En “Semblanza de un conflicto ambiental. San Francisco de Ixcatán, en defensa de la vida, la naturaleza y la cultura”, Paulina Martínez González y Eduardo Hernández González analizan el caso de la comunidad indígena San Francisco de Ixcatán, ubicada en la Barranca del río Santiago, dentro de los límites del municipio de Zapopan, a tan solo 28 kilómetros de la Catedral en el centro de Guadalajara. Como explican los autores, Ixcatán tiene una larga historia de resistencia, tanto para defender su territorio como para conservar sus tradiciones e identidad indígena. Hoy en día, estas luchas siguen vigentes y se entretienen con acciones para proteger la comunidad de diversas formas de degradación ambiental, entre las más preocupantes, la contaminación del río Santiago y sus tributarios, incluso por el escurrimiento de los lixiviados del relleno sanitario metropolitano Picachos. Con base en una investigación participativa, los autores ofrecen una descripción detallada del territorio de la comunidad, las fiestas tradicionales y las acciones encaminadas a sanear el medio ambiente. Citan a los ixcatanlenses para interpretar el significado de su activismo. Al mismo tiempo, sitúan su lucha en una profunda reflexión teórica y argumentan que la acción colectiva de esta comunidad apunta al cuestionamiento de la hegemonía de las orientaciones antropocéntricas y economicistas de orden capitalista.

En “Agua y conflictos ambientales en la ribera de Cajitlán, Jalisco” se analiza el caso de este lago. A partir de tres años de investigación e intervención participativa, Laura Velázquez López, Heliodoro Ochoa García y Jaime Morales Hernández reflexionan sobre la problemática socioambiental que se cierne sobre la ribera del lago de Cajitlán, ubicado a 25 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Guadalajara. Desde un marco teórico complejo,

que integra elementos de la ecología política, el ecologismo de los pobres y “la nueva cultura de agua”, los autores identifican un conjunto de procesos generadores de conflictos y alternativas en torno a la contaminación y el deterioro del lago y su entorno. Dichos procesos se articulan por tres ejes: el uso y el manejo del agua, la industrialización de la agricultura, y la gestión pública y social. Como señalan, durante las últimas dos décadas la ribera de Cajititlán ha atraído cada vez más gente y actividades económicas, sobre todo en torno al turismo y la agricultura industrial, con consecuencias negativas para el medio ambiente y los pobladores originarios, cuyos medios de vida se basan en la pesca y la agricultura campesina. De esta manera, el agua ha dejado de ser principalmente “agua vida”, para convertirse en “agua negocio”, con beneficios que se concentran en las manos de un puñado de empresarios ajenos a la microrregión. En este contexto, surgieron conflictos entre diferentes grupos sociales, pero también alternativas, que incluyen la agroecología, el comercio justo y la participación ciudadana en el manejo del agua y los demás recursos naturales de la zona. Con todo, los autores muestran cierto optimismo sobre los avances hasta la fecha y el potencial de las alternativas para fomentar un patrón de desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, reconocen que “existen retos significativos” no solo para realizar una participación ciudadana efectiva sino también para implementar un plan de desarrollo que conserve el medio ambiente, mejore las condiciones de vida para los pobladores locales “y se respeten la cultura, la identidad y el significado que el lago tiene para ellos”.

En “Fortalecimiento de la agricultura sustentable en la Costa Sur de Jalisco: la construcción de alternativas desde el quehacer campesino cotidiano”, Peter R.W. Gerritsen, Pedro Figueroa Bautista, Víctor M. Villalvazo López y Xóchitl Cíhuatl Castillo Castro reflexionan sobre las experiencias del Laboratorio de Desarrollo Rural (LDR) del Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, Jalisco. Describen las intervenciones diseñadas para fortalecer la agricultura sustentable e impulsar el comercio justo en la región. Como mencionan los autores, estas intervenciones tienen raíces que remontan a 1987, cuando se creó la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, aunque no fue sino hasta 1995 que empezaron a trabajar de

manera directa con grupos de productores rurales. Desde ese entonces, con base en una metodología participativa de educación popular, el personal del LDR ha facilitado la organización de más de 50 talleres para promover la agricultura orgánica en 22 municipios en el estado de Jalisco. Además, desde 2008, han facilitado el establecimiento de “tianguis campesinos”, en donde los productores pueden intercambiar sus bienes entre sí y venderlos a un público más amplio. Los autores describen los avances sobre todo en términos cualitativos, con énfasis en la participación de los campesinos, la revalorización de los conocimientos tradicionales y locales, la autonomía, la solidaridad y la sustentabilidad ecológica, entre otras cosas. Son optimistas con respecto al potencial de replicar y ampliar los procesos que conducen hacia la agricultura sustentable y el comercio justo. Al mismo tiempo, contextualizan las experiencias del LDR en una discusión más amplia de la crisis multidimensional que aflige el campo mexicano en la actualidad, la cual —según su diagnóstico— dimana de las políticas rurales mal diseñadas a nivel nacional, la promoción de tecnologías agroindustriales que son ecológica y socialmente destructivas, y el proceso de globalización en general. Desde esta perspectiva, tanto la crisis como las experiencias exitosas del LDR apuntan hacia la viabilidad de alternativas como la agroecología y el comercio justo.

En “Notas deshilvanadas sobre otra epistemología”, Jorge Regalado Santillán comparte algunas notas sobre una epistemología alternativa para estudiar los movimientos sociales. El autor invita a superar las limitaciones asociadas con el positivismo y romper las ataduras del pensamiento euro- y norte-céntrico; sugiere que los investigadores debemos construir relaciones horizontales con los sujetos sociales que conforman los movimientos sociales. En vez de buscar la manera de enseñarles algo desde arriba y desde afuera, debemos bajar la arrogancia típicamente encontrada en las universidades y acercarnos a los movimientos sociales mirando, escuchando y aprendiendo junto con sus principales protagonistas. De esta manera, dice Regalado Santillán, los investigadores también nos podemos convertir en sujetos sociales. Su análisis no se trata de manera específica de los movimientos socioambientales sino de movimientos en general, pues, como nos

ha señalado en una comunicación personal, “al menos quienes se inscriben en la Asamblea Regional de Afectados Ambientales así se autodefinen, como ‘pueblos en resistencia’ y enfáticamente niegan ser ecologistas o ambientalistas”. Como tal, las reflexiones y los cuestionamientos presentados en este texto final sirven para guiar investigaciones futuras, no solo sobre los conflictos socioambientales sino, de manera más general, de las “transformaciones constantes de la realidad [que] son realizadas sobre todo por la acción y las iniciativas de los sujetos sociales y no por el estado, sus políticas y sus instituciones.”

En consonancia con los planteamientos de Jorge Regalado Santillán, el lector notará que todos los trabajos aquí reunidos se basan —en un grado u otro— en los principios de la investigación acción y participativa (o uno de sus múltiples sinónimos). Por tanto, queremos cerrar esta introducción expresando nuestra gratitud a los innumerables sujetos sociales que han compartido sus enseñanzas y esperanzas con nosotros, en un gran esfuerzo por construir alternativas que nos incluyen a todos. Esperamos que nuestras investigaciones aporten, aunque sea de manera modesta, a realizar los objetivos de las diversas luchas que se analizan a lo largo de este libro.